



**MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**

***"Al servicio de la justicia y de la paz social"***

**A – 146**

**Proceso:** Ejecutivo conexo

**Demandante:** María Leopoldina Saldarriaga Hernández y otras.

**Demandados:** Marina Alandete Ortega.

**Radicado:** 05001 31 03 007 2023-00218-01

**Procedencia:** Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín.

**Asunto:** Apelación contra auto que niega mandamiento ejecutivo

**Decisión:** Revoca

**Temas:** Un acuerdo de voluntades con obligaciones recíprocas presta mérito ejecutivo si satisface los requisitos previstos por el artículo 422 C.G.P.

**Medellín, veintisiete (27) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023)**

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación interpuesto como subsidiario al de reposición, por el señor apoderado de la parte actora contra el auto proferido el día 2 de agosto del calendario que avanza, por el cual se denegó la orden de pago deprecada.

## **ANTECEDENTES**

En el proceso de la referencia, mediante auto del pasado 2 de agosto, el señor Juez Séptimo Civil del Circuito de Medellín negó el mandamiento ejecutivo deprecado, tras advertir que conforme al artículo 305 del C.G.P. puede exigirse la ejecución de providencias judiciales una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior. Pero la misma disposición precisa que la condena que se haya subordinado a una condición, solo puede ejecutarse demostrado su cumplimiento.

Memoró que se ejecuta acá por suma de dinero contenida en acta de conciliación de fecha 31 de mayo de 2018, pero la misma no satisface las señaladas exigencias, pues las obligaciones allí contenidas están sometidas a condición en tanto las partes celebrantes del acuerdo se obligaron a comparecer a la notaría el 31 de julio de 2018 para transferir el dominio del inmueble en favor de la aquí demandada, al paso que ésta se obligó a comparecer en la misma fecha para firmar la escritura y, cumplida tal condición, pagar la suma de \$300'000.000, es decir, ambas partes asumieron prestaciones en favor de la otra, lo que imponía al ahora ejecutante demostrar que honró su obligación, o al menos que se allanó a hacerlo, y como de ello no se trajo prueba, no es posible librar auto de apremio.

Contra el anterior proveído, interpuso el señor apoderado del ejecutante los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, memorando que lo perseguido es que la demandada cumpla con la obligación que contrajo en el

acuerdo conciliatorio, de restituir el 31 de julio de 2018 la suma que le había sido pagada por las ejecutantes como precio de la compraventa a que se refiere el proceso declarativo que fue terminado precisamente en virtud de tal conciliación.

Enrostra al juez actuar contra providencia ejecutoriada del superior toda vez que ya en ocasión anterior el tribunal le había revocado otra negativa de mandamiento ejecutivo en este mismo proceso, explicando que no era dable al juez abordar dicho tema porque hace tránsito a cosa juzgada. De ahí que ha debido abstenerse de entrar en las particularidades del negocio causal que dio lugar a la conciliación que, además, fue aprobada por el mismo juzgado.

Mediante auto del pasado 29 de septiembre el juzgado despachó negativamente el recurso horizontal y concedió la alzada, tras reiterar que las obligaciones contenidas en el documento que se ejecuta, acta de conciliación, *“están sometidas a una condición, porque ambas partes asumieron, al tiempo, contraprestaciones de lado y lado.”*

Expresó, de otra parte, que el cargo de actuar contra decisión ejecutoriada del superior desconoce que la providencia del 11 de mayo de 2021 emitida por el Tribunal Superior de Medellín se dictó en el marco de otro proceso también conocido por ese juzgado, donde la discusión era otra, amen que la providencia de dicha corporación lo que ordenó fue un nuevo análisis de admisibilidad, causa que terminó con auto de rechazo, el cual no fue recurrido por la parte afectada.

Para resolver el recurso de apelación, se

## **CONSIDERA.**

### **Anotación Preliminar sobre la solicitud elevada por el recurrente ante esta instancia.**

Envió el recurrente memorial pidiendo tener en cuenta los antecedentes del asunto, procediendo a narrar la existencia y suerte de dos procesos, uno de entrega del tradente al adquirente promovido por las compradoras del inmueble (aquí ejecutantes) contra su vendedora (ejecutada), y otro, al parecer resolutorio de contrato, promovido por la vendedora contra las compradoras, en cuyo marco se celebró la conciliación que se pretende ejecutar. Como alternativa, sugiere que se opte por dar aplicación al decreto 1265/70 art. 19 y Acuerdo 1472 de 2002, artículo 7º, como sugiriendo falta de competencia de la suscrita magistrada para decidir el recurso de apelación en este caso.

Al respecto advierte delantadamente esta funcionaria que no resulta de recibo una cosa ni la otra, lo primero porque para la decisión del problema jurídico que ofrece el caso, suficiente resulta cotejar el título ejecutivo que se hace valer con la respectiva disposición legal que lo define; y, lo segundo, porque no se da el supuesto previsto por los artículos 19 del decreto 1265/70, y 7º del Acuerdo 1472 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, cual es que se trate de recursos de apelación interpuestos en un mismo proceso, que indiscutiblemente no es el caso, por mas que los conflictos deriven del mismo negocio jurídico que otrora vinculó a las partes.

Ya en lo que es materia del recurso, se advierte que radica el meollo del asunto en determinar si para ejecutar obligaciones derivadas de un acuerdo de voluntades que impone obligaciones recíprocas, se requiere que el ejecutante acredite el cumplimiento de las suyas o al menos el allanamiento a cumplirlas, como lo estimó el señor juez a-quo; o basta que el acuerdo celebrado dé cuenta de los requisitos legalmente previstos para que constituya título ejecutivo.

No puede perderse de vista que en el proceso ejecutivo el acreedor pone en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener el cumplimiento forzado de una obligación plenamente reconocida por el deudor en un título de recaudo ejecutivo, dando plena certeza al operador jurídico del derecho material que en él se incorpora.

En efecto, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone: "*Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.*"

De suerte que la obligación que reúna tales características es ejecutable, independientemente de que esté contenida en un acto o contrato unilateral o

bilateral. Lo importante es que se cumpla el texto normativo en el sentido de que la obligación allí documentada reúna las calidades de claridad, expresividad y exigibilidad, requisito indispensable para que puedan ser materia de ejecución. Sobre el punto bien vale la pena citar en lo pertinente al maestro Hernando Morales Molina quien, al referirse a la exigibilidad de las obligaciones dimanadas de un contrato bilateral, puntualmente expone:

"Como las obligaciones expresas, claras y exigibles no sólo constan en contratos unilaterales, sino también en bilaterales, es aceptado por la jurisprudencia que se pueda librar mandamiento ejecutivo sobre un documento contentivo de un contrato bilateral, si la obligación que se pretende hacer cumplir reúne los requisitos dichos. Es cierto que el Art. 1690 (sic) del C.C. dice que "en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos", pero no es lo menos, según se explicó, que para ejecutar no se requiere que el deudor esté en mora, sino que la obligación sea exigible.

Por lo demás, si el ejecutado desea oponer el incumplimiento del acreedor a sus obligaciones como motivo suficiente para enervar la pretensión, podrá proponer excepciones, en este caso su nombre lo indica, la exceptio non adimpleti contractus o non rite adimpleti contractus, esto es de contrato no cumplido o no cumplido pertinentemente. La Corte expone: *"No es óbice para el ejercicio de la acción ejecutiva para implorar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a una de las partes, la ejecutada en este caso, el hecho del no cumplimiento por el ejecutante de las obligaciones que le incumben.*

*(...) En suma: para dictar mandamiento ejecutivo sólo se examina el título ejecutivo, y éste para ser tal basta que contenga una obligación expresa, clara y exigible contra el deudor, sin que generalmente haya lugar ni forma de investigar sobre la mora, ni si el acreedor ha cumplido o no con sus prestaciones, lo cual debe examinarse y probarse con excepciones".<sup>1</sup>*

De ese modo, es incontestable que el ordenamiento procesal exige que los documentos en los cuales se erija la solicitud de ejecución posean las

características de expresividad, claridad y exigibilidad, de allí que no es atendible ningún concepto judicial que pretenda la acreditación de requisitos adicionales. Basta con que en el cuerpo del documento consten obligaciones de las características propuestas, y que además provenga del deudor o de su causante. Dichas condiciones son de tal relevancia que es deber del juez verificarlas, incluso, oficiosamente, tanto al momento inicial para decidir si libra o no el auto de apremio en los términos en que fue solicitado, o en la que él considere legal (artículo 430 C.G.P.), como al momento final para decidir si ordena o no continuar la ejecución. Sobre el punto ha delineado la jurisprudencia constitucional de la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia: “***T]odo juzgador, sin hesitación alguna, [...] sí está habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el título que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarle tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jurídicas de aquel no fueron cuestionadas...***”<sup>1</sup>

El control que viene de aludirse se hace extensivo a todos los documentos que se presenten con vocación de ejecución jurisdiccional, incluido el que recoja un acuerdo conciliatorio, pues si bien el art. 64 de la Ley 2220 de 2022 establece que el acta contentiva del acuerdo presta mérito ejecutivo, es claro que este como cualquiera otro documento que se presente como base del recaudo, lo será solo si satisface las exigencias del citado artículo 422 del C.G.P.

---

<sup>1</sup> Ref. Sentencia STC 9880 de 2022, tomada de STC4808-2017 reiterada en STC4053-2018 y STC720-2021.

En otras palabras, en la medida en que el documento que recoge el contrato reúna los requisitos del artículo 422 del Código General del proceso, las obligaciones negociales que de allí se deriven pueden ser ejecutadas judicialmente, *contrario sensu*, si el documento que recoge el contrato no reúne tales características, debe el acreedor cumplido o que se allanó a cumplir, promover un juicio de conocimiento, tendiente a obtener de la jurisdicción la declaración del derecho controvertido.

Entonces debe anotarse, contrario a lo razonado por el juzgador de instancia para negar la orden de pago, que en tratándose de la exigibilidad de obligaciones contenidas en un contrato bilateral, ni es necesaria la declaración previa de incumplimiento por parte del deudor, ni mucho menos la prueba del cumplimiento de sus obligaciones por parte del acreedor demandante, pues dicha situación sería materia de excepciones en el juicio de ejecución que en contra del primero llegue a adelantarse.

Pues bien, según los términos del acuerdo que se pretende ejecutar en este caso, las partes se obligaron a restituirse lo recibido en virtud del contrato a que se refiere la demanda que dio lugar al proceso en cuyo marco se celebró aquél, por lo que las demandadas transferirían el inmueble a la accionante, y esta devolvería la parte del precio recibida (\$300.000.000), lo que habrían de realizar el 31 de julio de 2018 a las 2 PM en la Notaría 19 de Medellín. Esto solo permite concluir que cada una de las partes contrajo en favor de la otra, la obligación de restituir la cosa y el precio recibidos, en la fecha y lugar indicados, y también que las obligaciones a cargo de ambas son claras, expresas y exigibles, sin que el hecho de haberse obligado cada una en favor de la otra implique que se trata de obligaciones sometidas a condición



suspensiva, como parece sugerirlo el a-quo, pues tampoco puede soslayarse que conforme al artículo 1536 C.C., condición suspensiva es aquella que mientras no se cumpla, suspende la adquisición del derecho. Esta clase de condición, como lo expresa el tratadista Guillermo Ospina Fernández “*no solo afecta la exigibilidad de la obligación, como ocurre con el plazo suspensivo, sino que detiene su nacimiento mismo; 'la comprime en su fuente', como dice JOSSERAND*”,<sup>2</sup> y semejante estipulación en verdad no se advierte en el acuerdo celebrado y que es materia de ejecución en este caso.

Frente al panorama anterior se impone la revocatoria del auto apelado, a efectos de que el a-quo se pronuncie de nuevo frente a la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta lo dilucidado en esta providencia.

Por lo expuesto y sin necesidad de más consideraciones, la suscrita magistrada

## **RESUELVE.**

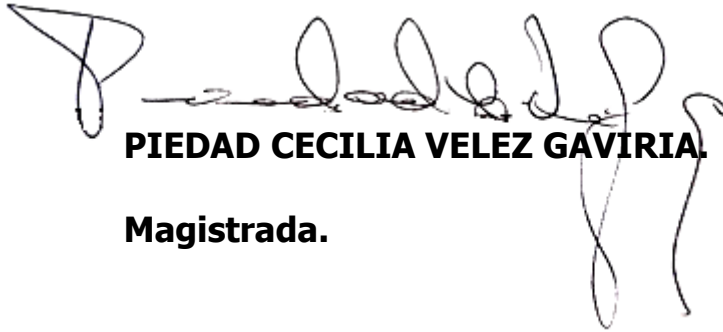
**Primero:** Revocar el auto de fecha y procedencia indicadas.

**Segundo:** disponer la devolución de las piezas digitales al juzgado de origen para que provea nuevamente sobre la demanda ejecutiva.

---

<sup>2</sup> OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. *Régimen general de las obligaciones*, octava edición, editorial Temis, Bogotá (2008), pág. 227.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.**



**PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA.**

**Magistrada.**

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **604f84de47edd249825ffe9444e02914340f7ab480c08050bd842c90597f4fa2**

Documento generado en 28/11/2023 03:47:00 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**